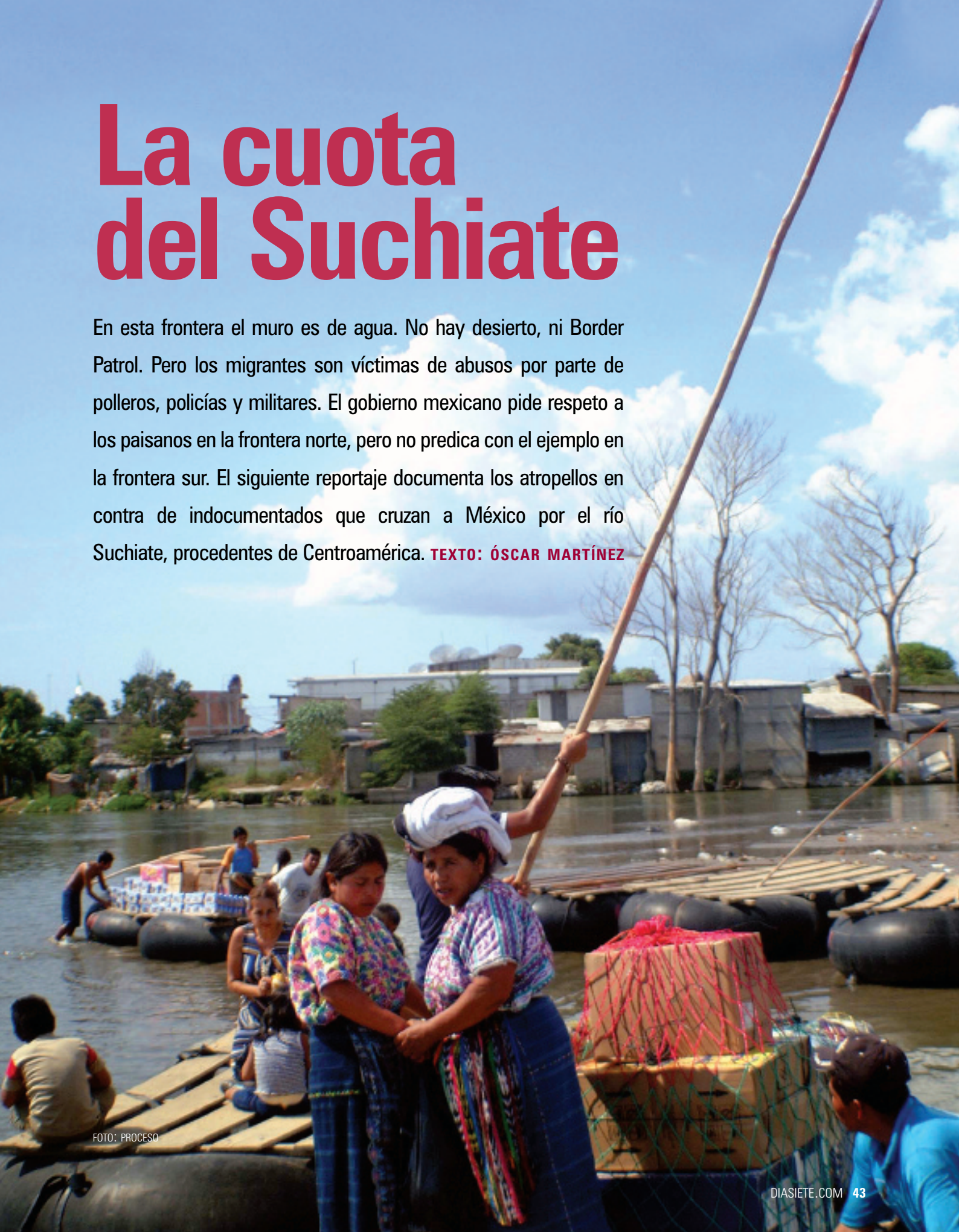


La cuota del Suchiate

En esta frontera el muro es de agua. No hay desierto, ni Border Patrol. Pero los migrantes son víctimas de abusos por parte de polleros, policías y militares. El gobierno mexicano pide respeto a los paisanos en la frontera norte, pero no predica con el ejemplo en la frontera sur. El siguiente reportaje documenta los atropellos en contra de indocumentados que cruzan a México por el río Suchiate, procedentes de Centroamérica. **TEXTO: ÓSCAR MARTÍNEZ**



Todos se agruparon atrás de Gerson. Como si fuera un escudo, los tres inmigrantes se hicieron bola detrás del pandillero, que encabraba solo el fusil que tenía a pocos centímetros. Ante la orden de uno de los dos militares, Gerson no quiso arriesgar más y dio la indicación a los de su retaguardia: "Saquen 200 pesos cada uno y dénmelos".

Gerson, el hondureño de 31 años, asegura que pensó un momento antes de entregar los 800 pesos. Vio a un lado y no había más que el río Suchiate, el que divide, en la zona sur de la frontera, a Guatemala de México. Al otro lado ni siquiera era necesario ver: había un fusil de cargo y un hombre de uniforme verde olivo detrás, flanqueado por otros dos más que estaban desarmados. El pandillero entregó el dinero.

Los tres, en fila india atrás de Gerson, hicieron el amago de irse. Entonces, uno de los militares desarmados pronunció la frase que a punto estuvo de parir una pelea a orillas del río: "Nos van a dejar a la chamaquita". Se refería a Ana, la muchacha de 21 años que estaba asida del brazo de Mario, su novio salvadoreño de 23 años.

"Les dije que no, compa, que si querían a la muchacha nos iban a tener que matar a los hombres", relata Gerson. "Yo casi me desmayo cuando se pusieron a verse entre ellos, porque pensé que ya nos caían los balazos", roba la palabra Mario, que ahora sorbe una taza de café en el albergue para migrantes de Ixtepec, Oaxaca, un paso más adelante en la geografía del indocumentado que va tras los dólares.

El grupo no esperó respuesta, caminaron a pasos lentos, a la espera de que no se escuchara el primer tiro. Llegaron hasta Arriaga, Chiapas, donde tomaron el tren que ahora los ha dejado en este pueblo del istmo de Tehuantepec. En el albergue creado por el padre Alejandro Solalinde, que se hizo célebre cuando en enero de este año fue agredido y encarcelado



FOTO: PROCESO

Los pasamojados hacen negocio cruzando centroamericanos a México.

"Con el reforzamiento de la seguridad en la frontera sur, son más notables las extorsiones a los centroamericanos"

durante unas horas por defender a un grupo de inmigrantes de una golpiza que les propinaban policías municipales.

"Yo creo que nos salvamos porque me vieron los tatuajes, y pensaron que yo no me les iba a ahuevar", explica Gerson. Él tiene tatuadas en su espalda dos letras inconfundibles en estas latitudes: MS. Mara Salvatrucha.

Tecún Umán (en Guatemala) y Ciudad Hidalgo (Chiapas), las dos riberas del Suchiate, son de los sitios donde más riesgo corren los indocumentados. Ahí, según estudios de Rodolfo Casillas, investigador de FLACSO México, tienen contacto las redes de trata de migrantes centroamericanos de Tapachula. Además, según publicaciones de medios chiapanecos son de las zonas con

altos índices de "secuestros exprés" de mojados.

La alerta del sur

Desde mediados de 2006, las organizaciones de defensa de los inmigrantes del sur de México han empezado a poner el ojo sobre los militares. "Es que con esto del reforzamiento de seguridad en la frontera sur, son más notables las extorsiones a los centroamericanos", explica el padre Heyman Vásquez, director del albergue para migrantes Hogar de Misericordia, de Arriaga, Chiapas.

En Ixtepec, la siguiente parada del tren que pasa por Arriaga, de los 30 indocumentados que acaban de llegar junto a Gerson, 16 aseguran haber sido asaltados en la ribera del Suchiate hace apenas cinco ▶

No es el río Bravo. Los ilegales arriesgan su vida en el río Suchiate para entrar a México.



FOTO:AFP

de 28 años que huía de su precario sueldo como auxiliar de bodega: “Nos bajamos de la balsa cinco personas en Ciudad Hidalgo, caminamos unos metros y dos soldados nos pararon. Nos llevaron a un barranco y nos dijeron que pusiéramos las mochilas en el suelo. Nos quitaron 700 pesos, porque nos dijeron que si no se los dábamos nos llevarían a Migración”.

Vale recalcar que en México las dos únicas autoridades que por ley pueden pedir su calidad migratoria a un indocumentado son la Policía Federal Preventiva y los agentes de Migración. Pero lo legal y lo real en el camino del migrante guardan una indomable distancia.

La variante más común que se encuentra en los relatos recopilados

► o seis días. Todos ellos tuvieron que pagar a los militares para poder seguir su camino hacia el norte. “Nomás te bajás de la lancha que te pasa el río te están esperando”, recuerda Jaime Flores, un mojado guatemalteco. Uno de los 16 asaltados a punta de fusil.

En Ixtepec, Juan Orozco escucha atentamente los comentarios de los recién llegados. Juan es un voluntario jesuita de 18 años, que desde finales de 2006 viene trabajando en albergues de Chiapas, Veracruz y ahora Oaxaca. Un buen currículum como para hablar con propiedad, si tenemos en cuenta que la ruta más utilizada por los indocumentados pasa invariablemente por Arriaga (Chiapas), luego por Ixtepec (Oaxaca) y sigue por Coatzacoalcos (Veracruz), todos lugares donde Juan ha trabajado.

“Lo de los asaltos en el Suchiate no es algo esporádico, ahí hay tarifa, de entre 50 y 500 pesos por persona que hay que dejar a los militares para pasar”, zanja el voluntario.

Sin embargo, estas denuncias de asaltos no tienen sólo letras, sino que están nutridas de cifras. “De enero al 31 de mayo de este año recibimos en el albergue a 2,940 migrantes centroamericanos,

Dos militares sancionados

Se le preguntó a la Secretaría de Defensa, vía sistema de acceso a la información, a cuántos militares habían sancionado por haber asaltado, golpeado o violado de cualquier manera los Derechos Humanos de un indocumentado.

La respuesta recibida el pasado 10 de julio fue contundente: “(Según información del ejército, sólo han sido sancionados) dos elementos, el 3 de marzo de 1998, en Mazatlán, estado de Sinaloa, por haber extorsionado a 19 civiles indocumentados por la cantidad de 800 pesos y 20 dólares”.

de los que 1,487 han sufrido robo por delincuentes y muchas veces por militares en Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala. Tenemos sólo 105 denuncias firmadas, porque muchos no quieren firmar su testimonio”. Esa fue la respuesta que el padre Heyman Vásquez dio cuando se le solicitaron números.

Las denuncias firmadas de las que habla son hojas elaboradas por el albergue que él dirige, para que el inmigrante, con su puño y letra, anote la fecha, el lugar, el detalle de los hechos y una descripción del militar que lo asaltó.

La mayoría de los documentos rezan una historia parecida, como la de José Omar León, un salvadoreño

por el padre Vásquez es la que se puede leer en la hoja firmada por Fredis Acosta, salvadoreño de 33 años, el pasado 21 de marzo: “El soldado nos quitó la ropa, registró las carteras, calcetines, mochilas...”. A orillas del Suchiate, algunos militares son más desconfiados que otros.

Juan Orozco, Alejandro Solalinde, Heyman Vásquez, el Centro Fray Matías de Córdoba de Arriaga, la ONG Sin Fronteras y hasta la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han documentado casos de violaciones a migrantes por parte de militares. La alerta no tiene sólo una voz, pero sí una sola lógica.

Ante esta alarma, la Secretaría de Defensa Nacional optó por ►

► negarlo todo. Negarlo mintiendo. El 19 de agosto pasado enviaron un comunicado de prensa asegurando que el ejército no detiene a indocumentados bajo ninguna circunstancia. Esto ocurrió después de que organizaciones de defensa de los migrantes denunciaran un operativo realizado por agentes de migración y militares en el albergue de Tenosique (Tabasco), donde detuvieron a 50 de los cerca de 5 mil indocumentados que estaban varados ahí, a causa de la suspensión de labores del tren Chiapas Mayab, el que comunica a Chiapas con Oaxaca.

Secretos públicos

Los asaltos a orillas del río no son cosa de este año. Al menos desde 2005, hay cifras obtenidas de encuestas realizadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con ayuda de algunas ONG. Sin embargo, el foco rojo se ha prendido hasta este pasado enero, pues las denuncias del padre Heyman y el padre Solalinde se escucharon con potencia.

De abril de 2005 a abril de 2007, se realizaron 2,703 entrevistas a migrantes centroamericanos y mexicanos en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Los encuestados reportaron 4,064 violaciones a sus Derechos Humanos, entre insultos, golpes, violaciones y robos.

Los militares ocuparon el sexto lugar en el podium de las instituciones más agresoras, sólo por debajo de la seguridad privada del tren, la Policía Nacional Civil de Guatemala, las diferentes policías municipales mexicanas, los agentes del INM y los elementos de las policías estatales mexicanas.

“Hay información de los propios migrantes, todos lo sabemos, pero para poder llegar a esa red necesitamos investigaciones de carácter policial... Yo te diría que sí están involucradas las autoridades, porque no creo que un fenómeno de esa magnitud pueda darse sin

su involucramiento. Quiénes, cuántos, de qué modo operan, no te lo puedo decir”, fue la respuesta que dio Ernesto Rodríguez, director del Centro de Investigación del INM.

De hecho, el 25 de abril, en su documento de argumentación para despenalizar la migración indocumentada, los diputados federales de todos los partidos firmaron un *mea culpa* en el que se puede observar que lo de los asaltos no es un secreto nacional: “La existencia de los tipos penales (penas de cárcel por ingresar sin papeles a México) abre terreno a prácticas de hostigamiento y de corrupción (en contra de los indocumentados) parte de algunas autoridades”.

Un paso al frente

Si un indocumentado denuncia alguna vejación ante un juez, corre el riesgo de que el INM, amparado

en el artículo 123 de la *Ley General de Población*, decida interponer una demanda en su contra, por haber ingresado ilegalmente a México. Eso podría equivaler a dos años de cárcel. Y, aunque la despenalización llegue a ocurrir, aún se enfrentaría a una multa. Algo complicado para el que llegue a denunciar que un militar le vació los bolsillos a orillas del Suchiate.

La ausencia de sanciones no será por falta de denuncias. Nada más el miércoles 24 de enero de este año, Mario y Ana, ambos salvadoreños, cruzaron la frontera en Ciudad Hidalgo, y fueron detenidos por siete militares que los asaltaron y sometieron en el suelo a Mario, mientras desnudaban a Ana y la tocaban. El caso fue enviado el 25 de enero a la sede de la CNDH en Tapachula, por

Los encuestados reportaron 4,064 agresiones a sus derechos, entre insultos, golpes, violaciones y robos



el equipo de asesoría legal del Centro Fray Matías de Córdoba.

Este es uno de los casos que seguramente quedarán en letra muerta. Ana y Mario ya están en El Salvador, y sin intenciones de regresar a denunciar nada a ningún juzgado.

Así las cosas. Los agraviados se van. El ejército lo niega todo y los migrantes siguen dejando su dinero al desembarcar de los cayucos que les cruzan el afluente. Los asaltantes de verde olivo que esperan a orillas del Suchiate pueden estar tranquilos, porque nadie anda detrás de quitarles su peaje. •

El viaje en frágiles balsas es la antesala para después sucumbir a una gran serie de sobornos.